

# Jurisprudencia



## I. General

**§ 582. Gobierno Vasco c.  
Presidente del Tribunal  
Constitucional  
TC Pleno A 20 noviembre  
2002**

§ 582. MANIFESTACIONES EXTRAPROCESALES SOBRE UNA LEY OBJETO DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD: SU POSIBLE INCIDENCIA EN LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL

*Gobierno Vasco c. Presidente del Tribunal Constitucional (Excmo. Sr. don M. Jiménez de Parga).*

Tribunal Constitucional (Pleno).

Auto de 20 de noviembre de 2002.

Constitucional: incidente de recusación en proceso de recurso de inconstitucionalidad.

Abogados: no constan.

### *Hechos y cuestiones jurídicas*

*En diversas entrevistas y publicaciones, el Magistrado Presidente del TC expresa su opinión jurídica acerca de diversas cuestiones relativas al Anteproyecto y Proyecto de Ley de Partidos Políticos. Una vez promulgada la ley —se trata de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos—, el Gobierno Vasco interpone recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Las partes promotoras de dicho*

*recurso cuestionan la imparcialidad del Presidente del TC y fundan su recusación en las manifestaciones previamente realizadas por ese Magistrado, alegando que las mismas evidencian un interés directo en la causa por parte del Magistrado y suponen una anticipación del resultado del juicio de inconstitucionalidad.*

### Fallo

*El Tribunal Constitucional de manera unánime desestima la recusación formulada contra el Presidente del Tribunal Constitucional.*

### Fundamentos Jurídicos

*Primero.* El art. 165 CE remite a la LOTC la regulación, entre otros extremos, del funcionamiento de este Tribunal y del estatuto de sus miembros. Por su parte, el art. 22 LOTC dispone que los magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo, entre otros principios, con el de imparcialidad, a cuyo aseguramiento obedecen precisamente las causas de recusación y abstención, materia en la que el art. 80 LOTC se remite, a falta de una regulación expresa, a la LOPJ y a la LEC. Así pues, y en virtud, a su vez, de la remisión de la LEC a la LOPJ, las causas de recusación y abstención de los magistrados del Tribunal Constitucional son las enumeradas en los arts. 219 y 220 LOPJ.

En numerosas resoluciones, de las que el exponente más reciente es el ATC 136/2002, de 22 Jun., este Tribunal ha aludido al carácter taxativo y de *numerus clausus* de las causas de abstención y recusación de sus magistrados. Así, respecto a aquel carácter se declaró en la citada resolución, que «las causas de abstención y recusación se encuentran taxativamente enumeradas en los artículos 219 y 220 LOPJ y, según hemos afirmando en reiteradas ocasiones, los motivos de recusación “han de subsumirse necesariamente en algunos de aquellos supuestos que la norma define como tales” (STC 69/2001, de 17 Mar., FJ 21, que, a su vez, cita la STC 157/1993, de 6 May., FJ 1, y el ATC 111/1982, de 10 Mar., FJ 5)».

En definitiva, cualquiera que sea la quiebra de imparcialidad que se alegue en relación con un magistrado de este Tribunal ha de ser reconducida a una de las mencionadas causas legales (ATC 64/1984, de 2 Feb.), lo que en ningún modo supone que pueda prescindirse en la recusación de las consideraciones constitucionales sobre la imparcialidad, pues, en definitiva, las causas de abstención y recusación no son sino los medios legales para garantizarla, de modo que dicha garantía constitucional de imparcialidad es el fin al que tienden dichas causas, a cuya luz deben ser interpretadas.

*Segundo.* En este caso el Gobierno vasco alega como causa legal de recusación del Presidente de este Tribunal, Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, la prevista en el art. 219.9.ª LOPJ («tener interés directo o indirecto en el pleito o causa») al entender que, como consecuencia de las opiniones manifestadas en diversos medios de comunicación, ha comprometido su opinión sobre el objeto del proceso constitucional, acreditando así tener un interés directo en su desestimación.

Así pues, se aduce un motivo de recusación de naturaleza objetiva (ATC 136/2002, de 22 Jul., FJ 4), como es el previsto en el apartado 9 del art. 219 LOPJ, que se refiere a «tener un interés directo o indirecto en el pleito o causa», determinante de «contaminación por interés» (ATC 224/2001, de 18 Jul., FJ 1). Este Tribunal ha puesto el referido motivo en relación con el objeto del proceso en el que la recusación se plantea, y concretado en la existencia de un interés en el resultado del proceso constitucional en el que aquélla se formula (ATC 379/1993, de 12 Dic., FJ 3). Pero ha exigido que por los recusantes se especifique, razone y acredite «en qué aspecto concreto» los magistrados recusados «tienen algún interés, mediato o no, directo o indirecto» en el proceso constitucional respecto al cual se ha formulado la recusación (ATC 224/2001, de 18 Jul., FJ 1).

*Tercero.* El «interés directo» que aquí se alega como causa de recusación se sustenta y deduce de las opiniones manifestadas por el recusado en diversos medios de comunicación en relación con lo que el recusante define como «objeto del proceso», en referencia al recurso de inconstitucionalidad por él interpuesto contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 Jun., de Partidos Políticos.

Aunque no sea necesario definir de modo exhaustivo qué sea «interés directo o indirecto en el pleito o causa» (art. 219.9.ª LOPJ), una primera aproximación al concepto puede ser la que ofrece el Diccionario de la Lengua Española del término «interés» en su acepción de «inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración». Partiendo de

ello no cabe excluir que la manifestación o expresión de opiniones e ideas más o menos relacionados con el objeto del proceso constitucional pueda subsumirse en el concepto de «interés», entendido éste en la amplia acepción antes descrita. Así, en el ATC 380/1993, de 21 Dic., al resolver una recusación planteada contra el entonces Presidente de este Tribunal, sustentada en la posible existencia de un interés como consecuencia de unas manifestaciones por él efectuadas, se vino a admitir implícitamente que determinado tipo de declaraciones pudieran ser exponentes del interés al que se refiere el art. 219.9.<sup>a</sup> LOPI, si bien se descartó en aquella ocasión su concurrencia en el caso concreto examinado, porque, «ni se hizo manifestación alguna sobre la solución que el Tribunal habría de dar al entonces supuesto recurso de amparo (por cuando el Presidente del Tribunal, hoy magistrado recusado, se negó a responder a las preguntas que en esa línea se plantearon), ni de la mera reflexión general que sobre el particular se hizo cabe deducir la concurrencia de las causas de recusación alegadas» (FJ 3).

De otra parte la causa de recusación se invoca en este caso en un recurso de inconstitucionalidad. En atención a la naturaleza e índole del proceso, quienes han alegado en este incidente han formulado distintas consideraciones en relación con el posible juego o no, o su carácter excepcional, de las diferentes causas de recusación y abstención en este tipo de proceso, dado el carácter abstracto que reviste el examen de la constitucionalidad de las Leyes o normas con rango de Ley. A este respecto baste con señalar, a los efectos que aquí y ahora interesan en relación con el concreto motivo de recusación aducido, que el carácter abstracto que el recurso de inconstitucionalidad presenta en nuestro sistema, determinante sin duda de algunos aspectos de su regulación, no es, sin embargo, obstáculo en principio para la posible concurrencia y, en su caso, consiguiente apreciación en tal tipo de proceso de la causa de recusación invocada; esto es, de la posible existencia en algún magistrado que tuviera que conocer del recurso de un interés directo o indirecto en el pleito o causa como consecuencia de la manifestación de opiniones más o menos relacionadas con el objeto del proceso, de modo que un compromiso del magistrado con una opinión determinada, expresada al margen del proceso, pudiera determinar una sospecha de parcialidad fundada en su «interés» en la causa. El art. 22 LOTC dispone que los magistrados de este Tribunal ejercerán sus funciones de acuerdo con el principio de imparcialidad, sin margen de distinción alguna según el diferente tipo de proceso del que conozcan.

Ciertamente los jueces y magistrados gozan del derecho de expresar libremente sus ideas y opinio-

nes, sin perjuicio de los deberes de discreción y reserva cuando éstas guardan relación con los asuntos sometidos a su jurisdicción (SSTEDH de 24 Feb., Caso Haes et Gijssels contra Bélgica; y de 16 Sep. 1999, Caso Buscemi contra Italia; TC SS 46/1998, de 2 Mar., FJ 5 y 162/1999, de 27 Sep., FJ 9). Pero el problema que nos ocupa no puede resolverse en clave de libertad de expresión, pues, al margen de que unas determinadas manifestaciones de opinión, en cuanto a su emisión, puedan estar cubiertas por tal derecho, ello no impediría (si es que a tales manifestaciones pudiera atribuírsele esa transcendencia) que pudieran afectar a la imparcialidad del Juez que las emite. Libertad de expresión y afectación a la imparcialidad de un determinado Juez se sitúan en planos jurídicos distintos.

*Cuarto.* Las precedentes consideraciones no implican, sin embargo, que quepa dar por sentado que las manifestaciones de opiniones más o menos relacionadas con el objeto del proceso constitucional justifiquen sin más y de principio la existencia de un interés directo en su resolución, salvo que se desvirtúe la garantía constitucional de imparcialidad, ínsita en la mencionada causa de recusación. En este sentido, el propio recusante, en alusión a los magistrados del Tribunal Constitucional, califica en sus alegaciones de «normal y, desde luego lógico, que antes de acceder al cargo o, incluso estando en él, hayan expresado su opinión en Derecho sobre las materias de las que han de conocer en los diferentes procedimientos constitucionales»; reconociendo que «ese hecho no puede ser, por lo tanto, razón suficiente para plantear su recusación». «Sólo cuando se pronuncien con respecto a un caso concreto del que conozcan o sea previsible que deban enjuiciar como miembros del Tribunal Constitucional, cabrá cuestionarlo».

Para que ello ocurra, esto es, para que la manifestación pública de tales opiniones pueda revelar la existencia de un interés directo o indirecto en el proceso, habrá que atender en cada caso a las circunstancias concurrentes, y que éstas permitan constatar objetivamente dicha manifestación como una toma de partido sobre el fondo del concreto proceso en el que la recusación se plantea. Sin ánimo de exhaustividad en su enumeración, resultarán relevantes, entre otras posibles circunstancias, si la opinión ha sido manifestada en la condición de magistrado de este Tribunal o antes de haberse adquirido la misma, una vez que el proceso se haya iniciado o resulte probable su inicio o en momentos anteriores al mismo, el medio en que se vierta la manifestación, la lejanía entre el objeto de la opinión y el objeto del proceso, así como la amplitud, «el tenor, la contundencia y radicalidad de aquélla» (STC 162/1999, FJ 9). De este conjunto de circunstancias, y de otras que puedan

concurrir en el supuesto concreto enjuiciado, habrá que deducir si la opinión manifestada constituye una auténtica toma de partido sobre el objeto del proceso que justifique la sospecha de un interés directo o indirecto en el mismo, o si, por el contrario, simplemente se trata de la manifestación de una primera impresión, insuficiente para ser considerada como un juicio anticipado sobre la pretensión del recurrente y, por lo tanto, para fundamentar la duda sobre la imparcialidad del magistrado.

*Quinto.* Descendiendo de las consideraciones jurídicas generales al análisis de las alegaciones del recusante, debe partirse de la base de que el ámbito de la *cognitio* del Tribunal en este incidente queda limitado por aquéllas y la prueba que las sustenta, debiendo subrayarse que el recusante viene a «precisar los hechos concretos» —folio 59 del escrito de demanda— que fundan su recusación, refiriéndose a las declaraciones del recusado en Onda Cero el día 4 Abr. 2002 y al artículo publicado en ABC bajo el título «El TC español y el TC alemán», y puesto que el interés directo en que se cifra el fundamento jurídico de la recusación lo deduce el recusante de unas determinadas manifestaciones de opinión del recusado, deberán ser estas opiniones el único soporte fáctico de dicha causa de recusación.

Quedan así fuera de esos hechos las manifestaciones de 8 Abr. 2002, transcritas en la edición digital del diario El País en las que el recusado tras afirmar que «una cosa es ser demócrata y otra tonto», explica que en democracia se pueden defender todas las ideas pero que no se puede atentar contra el orden democrático con el terrorismo, manifestándose a favor de una normativa que permita la ilegalización de partidos que no condenan la violencia terrorista y que la amparan. Pero aunque dichas manifestaciones queden fuera de los hechos antes referidos, no está de más advertir que las mismas no contienen juicio de constitucionalidad sobre texto concreto alguno y, por lo tanto, están desconectadas del objeto del proceso. Y tampoco guarda ninguna relación con él la afirmación, realizada el 16 Abr. 2002, transcrita en la edición digital del diario El País, relativa a la posibilidad constitucional de un referéndum sobre la autodeterminación del País Vasco.

*Sexto.* Comenzando, pues, nuestro análisis de fondo por el artículo de ABC, publicado en el marco de una discusión doctrinal acerca de si la competencia para una posible ilegalización de partidos políticos habría de corresponder al Tribunal Constitucional o a los jueces y Tribunales ordinarios, tal cuestión no guarda relación alguna con la pretensión de inconstitucionalidad deducida en este proceso.

Por lo que hace a la entrevista en Onda Cero son tres los elementos de ella que, según la alegación del recusante, conciernen al actual proceso: a) la alegada opinión del recusado sobre la inexistencia de motivos de inconstitucionalidad en la Ley; b) la opinión acerca de la legitimación para instar la ilegalización de un partido político; y c) el alegado pronóstico sobre la suerte de un posible recurso contra la Ley.

En cuanto a la primera cuestión se trataba de la respuesta a una pregunta, cuyo objeto no era el juicio del recusado sobre el Anteproyecto, sino su opinión sobre si existía consenso sobre él en la judicatura. Y es al hilo de la emisión de esa opinión, como se emite la que aquí se cuestiona. La respuesta en sí misma tiene el significado inequívoco de eludir cualquier juicio definitivo («no puedo decir ni sí ni no en el sentido que desconozco la opinión de los jueces y magistrados»), de ser sólo una primera impresión sobre datos de un conocimiento incompleto («por lo que yo conozco del Proyecto de Ley»), de carácter meramente presuntivo de opiniones ajenas («por lo que yo sé y supongo que los jueces y magistrados de España participarán de esta opinión»), y no cerrada a opiniones de sentido contrario, sobre las que no se adelanta ningún juicio («aunque, como tantas veces sucede en el mundo del Derecho, existan opiniones aisladas minoritarias, que puedan oponerse por alguna razón, que todavía yo no he visto en ningún sitio, he visto descalificaciones más o menos globales, pero no decir, en este punto concreto, esto es inconstitucional»).

Es especialmente destacable este último factor de apertura a la consideración de otras posibles opiniones. El uso del adverbio temporal «todavía» en el contexto de la frase en que se inserta revela el distanciamiento entre lo que en ese concreto momento se está diciendo, y lo que en otro, y a la vista de otras posibles argumentaciones a considerar, pueda decirse; y como es precisamente esto último lo que debe contar, carece de entidad relevante lo que se dice bajo el marco de ese expresivo «todavía».

En este contexto, la frase «no van a encontrar, yo no he encontrado al menos ningún defecto importante o cualquier tipo de desviación importante que pudiera ser tachada de inconstitucional, esta Ley me parece una Ley correcta», tanto por su propio tenor («al menos yo no he encontrado», «me parece») como por el contexto en que se inserta dista mucho de constituir una afirmación categórica. A lo que se añade que se trata de una opinión manifestada cuando la norma ulteriormente impugnada se hallaba en fase de anteproyecto, esto es, antes de que hubiera ni proyecto, ni Ley, ni recurso trabado contra la misma.



Evidentemente no es lo mismo la opinión emitida respecto de un anteproyecto, destinado a una compleja tramitación ulterior; que la emitida respecto de lo que ya sea una ley vigente, susceptible de un recurso de inconstitucionalidad; que, finalmente, la emitida sobre esa misma norma, cuando ya ha sido recurrida en inconstitucionalidad, y se integra por ello como contenido del objeto del recurso de inconstitucionalidad: la pretensión impugnatoria.

La lejanía, no ya temporal sino lógica, entre el objeto de la opinión (el Anteproyecto), y la pretensión impugnatoria de la Ley en el proceso ya entablado, es un elemento de indudable entidad para que pueda aceptarse, sin más y de principio, que la opinión manifestada sobre el primero determine ya de por sí una toma de partido respecto del objeto del recurso.

Por todo ello ha de afirmarse que las manifestaciones carecen del tenor, la contundencia y la radicalidad que serían necesarias para que pudiesen fundamentar una sospecha justificada de parcialidad; esto es, de que el recusado hubiese tomado partido en la causa.

En lo relativo a la respuesta acerca de los legitimados para interponer la demanda de ilegalización ha de concluirse que no justifica la sospecha de parcialidad, por cuanto dicha regulación no es objeto de la pretensión impugnatoria, y por tanto las manifestaciones del Presidente al respecto nada prejuzgan sobre ella. En efecto, en aquella pretensión lo que se hace es sólo aludir al art. 11 (en el que se regula la le-

gitimación) en relación con el carácter atribuido a la Ley de norma singular.

Y por último, en cuanto al pronóstico respecto del resultado de un recurso de inconstitucionalidad, la lectura del texto mecanográfico de la entrevista pone en evidencia que la manifestación del recusado no tiene que ver con la suerte de un recurso o cuestión de inconstitucionalidad contra la LOPP, sino con un recurso de amparo, consecuente a una previa sentencia de ilegalización de Batasuna, recursos y sentencia considerados en términos hipotéticos, que es como se planteó la pregunta al entrevistado por el entrevistador. Pero es que además la concreta respuesta a la pregunta del entrevistador no tiene la contundencia que el texto referido en la recusación sugiere, pues comienza, en primer lugar, enunciando la situación como mera suposición; continúa, en segundo lugar, con una expresión de cautela sobre la imposibilidad de previsión («... la situación que se plantee, naturalmente ahora mismo no puedo preverla»); sigue con una expresión de confianza en los jueces; y es sólo después de todos esos pasos conceptuales previos, cuando se emite por el entrevistado una mera suposición.

*Octavo (sic).* En conclusión ha de afirmarse que no existe base objetiva razonable para poder afirmar que las declaraciones del Excmo. Sr. Presidente de este Tribunal en la cadena Onda Cero y en el artículo de ABC analizados, que son los hechos precisados por el recusante como fundamento de la recusación, hayan «comprometido su opinión sobre el asunto objeto de este recurso de inconstitucionalidad, acreditando así tener interés directo en su desestimación».

## COMENTARIO

Por Lorena Bachmaier Winter

Es ésta una de las pocas resoluciones en las que nuestro TC aborda directamente la cuestión de la incidencia de las manifestaciones extraprocesales sobre la cuestión objeto de enjuiciamiento en la garantía de la imparcialidad judicial. Anteriormente ya se había ocupado de este tema en el ATC 380/1993, aunque dentro del contexto de un recurso de amparo y en aquella ocasión la recusación también fue desestimada por considerarse que de las manifestaciones realizadas no podía deducirse la anticipación del fallo ni, por tanto, tampoco, la existencia de un interés en el sentido del art. 219.9.º LOPJ (1).

Diversos son los motivos que nos llevan a dedicar una especial atención a este auto. De un lado, la resolución resulta de sumo interés porque en ella se parte de la premisa de que la garantía constitucional

de la imparcialidad puede verse afectada por la emisión de opiniones que reflejen la existencia de un juicio anticipado, y que tales hechos encajarían dentro del motivo de recusación del art. 219.9.º LOPJ. De otro lado, la extensa fundamentación jurídica de este auto nos ilustra acerca de las circunstancias que, a juicio del TC, pueden servir para valorar si las manifestaciones realizadas por un juez expresan o no la existencia de un juicio ya formado sobre el objeto del proceso.

### *1. Imparcialidad, manifestaciones extraprocesales y deber de discreción judicial*

Para valorar el alcance de esta decisión, en primer lugar, hemos de clarificar cómo inciden las declaraciones extraprocesales de un juez o magistrado en la imparcialidad.

La imparcialidad se equipara a los términos de objetividad y neutralidad y se caracteriza por la au-

sencia de prejuicios y de parcialidad. Si la imparcialidad se define como ausencia de parcialidad, definición contenida en numerosas resoluciones del TEDH, ello obliga necesariamente a analizar qué se entiende por «parcialidad». Se entiende que existe parcialidad cuando en su decisión el juez favorece o tiende a favorecer a una de las partes sobre la base de argumentos ajenos al proceso y distintos de la aplicación del derecho objetivo, atentando así contra el principio de igualdad. La parcialidad, por tanto, consiste en que el juez en el desarrollo del proceso y/o en la emisión de su decisión toma partido a favor de una de las partes por influencia de circunstancias subjetivas y ajenas al caso.

Las llamadas «manifestaciones extraprocesales» son un cauce a través del cual se exteriorizan determinados estados de ánimo y razonamientos internos del juez y dependiendo de su contenido, forma y momento, esas manifestaciones pueden conllevar un riesgo para la imparcialidad del juez llamado a decidir en un caso concreto. Por ejemplo, a través de declaraciones que exterioricen sentimientos puede desvelarse una relación de amistad o enemistad manifiesta entre la persona del juez y alguna de las partes, relación ya contemplada como causa de exclusión del juez al amparo del art. 219.8.º LOPJ. En estos casos, las manifestaciones o declaraciones realizadas por el juez, tanto en ámbitos privados como públicos, son elementos externos que, junto con otros, servirán para valorar la concurrencia de un concreto motivo de abstención/recusación que ya ha sido objeto de amplio estudio doctrinal y desarrollo jurisprudencial.

Lo que aquí interesa analizar son las declaraciones o manifestaciones extraprocesales realizadas por un juez acerca de alguna cuestión fáctica o jurídica y clarificar cuándo y en qué medida esas manifestaciones u opiniones pueden afectar al derecho fundamental a un juez imparcial y qué relación pueden tener esas declaraciones con la existencia de un «interés en la causa». Nos limitamos, por tanto, a analizar la incidencia de las manifestaciones extraprocesales de un juez en la garantía de la imparcialidad. No vamos aquí a entrar a cuestionar cuál es el papel que deben ocupar los jueces en el debate público, ya sea político o de otra índole, dentro de cada sociedad ni de decidir si su activa intervención en la vida pública, realizando valoraciones y ofreciendo su opinión sobre los temas jurídicos o de relevancia social, es beneficioso o no. Al respecto hay una amplia diversidad de opiniones (sobre este debate en Alemania *vid.*, entre otros, H. J. WIPFELDER, «Was darf ein Richter sagen?», *ZRP* 1982/ 5, págs. 121 y ss.; P. MARQUA, «Was darf ein Richter öffentlich sagen?», *Anwaltsblatt*, Bd. 34, 1984/1, pág. 34; H. SENDLER, «Was

dürfen Richter in der Öffentlichkeit sagen», *NJW* 1984/13, págs. 689-752; K. RUDOLPH, «Öffentliche Äußerungen von Richtern und Staatsanwälten», *DRiZ* 1987/9, págs. 337-348).

Tampoco queremos aquí entrar en el tema de cuál ha ser el deber de discreción o el sentido de la prudencia exigible a los jueces. En ese contexto, las declaraciones emitidas por los miembros de la judicatura en los medios de comunicación han suscitado fuertes críticas por considerar que tales manifestaciones incumplen el deber de discreción y contravienen el sentido de la prudencia que cualquier representante de la institución del poder judicial debe respetar. Sin duda la proliferación de manifestaciones públicas en los medios de comunicación no es beneficiosa, pero el hecho de que ciertas intervenciones u opiniones de los jueces sobre temas jurídico-políticos controvertidos puedan tacharse de políticamente inoportunos, desacertados o incluso incorrectos, no resuelve la cuestión de si al expresar su opinión los jueces en los medios de comunicación se deteriora la imagen de imparcialidad. Ello nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿afecta más a la imparcialidad o genera más sospechas de parcialidad la opinión vertida en el desarrollo de una entrevista radiofónica que la que se expresa en el ámbito de un seminario jurídico, aunque su contenido sea el mismo? En otras palabras, ¿el hecho de que una declaración tenga mayor repercusión que otra, incide en la imparcialidad?

Si se respondiera afirmativamente a estas preguntas, ello supondría admitir que la garantía de la imparcialidad es reducible a términos cuantitativos, de tal manera que la parcialidad de un juez se habría de medir por el grado de difusión de sus opiniones: a mayor número de destinatarios mayor la parcialidad. Tal planteamiento obviamente es inaceptable.

En relación con la quiebra de la imparcialidad de la justicia, ha de puntualizarse que ésta sólo puede producirse en relación con un proceso concreto y que, por tanto, la actuación parcial o bajo sospecha de parcialidad sólo puede producirse en relación con el objeto o con las partes de un determinado proceso judicial. Por ello, sólo las opiniones judiciales vertidas por un juez acerca de una cuestión jurídica que él ha de resolver en el ejercicio de su función jurisdiccional, podrán afectar a la garantía de la imparcialidad. Pero, mientras no guarden relación con los asuntos que ha de resolver, en principio, su imparcialidad no queda en entredicho.

Con lo anterior queremos destacar que existen muchos motivos por los cuales puede considerarse poco conveniente o poco prudente que los miembros

de la judicatura realicen valoraciones jurídicas a través de los medios de comunicación, pero sólo en supuestos muy limitados el motivo se centra en la quiebra de la garantía de la imparcialidad como tal.

Tener una opinión o convicción previas no necesariamente implica ser parcial. Sólo cuando se adelanta la decisión sobre el proceso o sobre alguno de los elementos del mismo, y esa decisión se revele como definitiva entonces se aprecia un verdadero riesgo para la imparcialidad y ello debería fundar la exclusión de ese juez. El juez que expresa anticipadamente su decisión definitiva, aunque con ello no persiga un interés personal de beneficiar a alguna de las partes, no está decidiendo de manera objetiva, pues deja de lado los elementos del proceso que han de conformar su convicción, y emite un juicio basado en otros elementos ajenos al proceso.

En este punto existe una clara diferencia entre la convicción formada acerca de las cuestiones jurídicas y la relativa a los hechos. Mientras esta última debe surgir a partir de lo actuado en el proceso, la calificación jurídica de unos hechos, ya sea en abstracto o en concreto, no está vinculada a la actuación procesal de manera tan estrecha. De los jueces se espera que con carácter previo no tengan formado un juicio acerca de los hechos, pero respecto de las cuestiones jurídicas, lo normal es que, atendiendo a sus conocimientos del derecho, sean capaces de adoptar ya una determinada posición respecto de las cuestiones jurídicas suscitadas.

Ello significa que la existencia de una opinión acerca de una cuestión jurídica, que tenderá a favorecer o a perjudicar la posición de una de las partes de un hipotético proceso en el que se suscitara esa cuestión, no constituye, como regla, un motivo para dudar de la imparcialidad judicial. Nada cabe objetar a que un juez se haya formado una opinión acerca de una cuestión jurídica sobre un asunto que luego es llamado a decidir, y en principio, aunque con matizaciones, nada impide que exprese esa opinión jurídica públicamente.

No obstante, cuando de lo manifestado por un juez se deduce que su valoración jurídica de unos hechos es inamovible, en el sentido de que el juez no está dispuesto a someterla a reconsideración o modificación, sí pueden surgir dudas acerca de su imparcialidad. A todo juez, aunque asuma una determinada concepción jurídica con carácter previo a la sustanciación del proceso, sí le es exigible que se muestre abierto a asumir otras conclusiones y a revi-

sar su propio criterio en virtud de lo argumentado por las partes.

Diversos criterios y pautas pueden servir para valorar si el juez tiene con carácter previo formada una convicción definitiva e inamovible principalmente sobre las cuestiones jurídicas objeto del proceso, entre los cuales la forma y el tono de esas declaraciones, además de la frecuencia y la cercanía temporal de las mismas son los elementos determinantes. El medio en el que se expresa la opinión jurídica no es por sí solo un factor que permita valorar el grado de fijación de la convicción del juez sobre un concreto tema, aunque obviamente permite medir el alcance y finalidad de las declaraciones.

## *II. Incidencia de las concretas manifestaciones alegadas en la garantía de la imparcialidad*

El incidente de recusación que se resuelve en este auto se funda en las manifestaciones realizadas por el recusado en dos concretos actos. En coherencia con ello, el TC afirma que el ámbito de cognición del incidente de recusación queda reducido a analizar si esas concretas manifestaciones atentan contra la garantía de la imparcialidad. Quedan, por tanto, fuera del objeto del incidente otras manifestaciones realizadas por el recusado. No obstante, y para evitar cualquier duda al respecto, el TC termina pronunciándose también acerca de las otras manifestaciones realizadas por el recusado, para concluir que de las mismas tampoco se deduce sospecha alguna de parcialidad judicial en relación con el proceso de constitucionalidad en que se formula la recusación.

Las manifestaciones que alega el recusante y que interesa aquí analizar son las siguientes (el contenido íntegro puede verse en el auto transcrito):

1) El artículo publicado en el diario «ABC» el 5 de mayo de 2002 titulado «El TC español y el TC alemán»; y

2) Las declaraciones emitidas en «Los desayunos de Onda Cero» el día 4 de abril de 2002.

1) En relación con el artículo titulado «El TC español y el TC alemán», respecto del cual el recusante afirma que contiene una clara posición a favor de la opción legislativa adoptada por la LO de Partidos Políticos, el Tribunal Constitucional, descarta en un breve párrafo (FJ 6) que afecte a la imparcialidad del recusado pues «no guarda relación con la pretensión de inconstitucionalidad deducida en este proceso». Se trata de un texto en el cual, desde una perspectiva iuscomparatista se exponen las competencias del TC alemán y el español. Al estimar el TC que el contenido del artículo no guarda relación con el objeto del

proceso, se pierde la oportunidad de saber cuál es la valoración de nuestro Tribunal Constitucional acerca de la incidencia que tienen las opiniones vertidas por los jueces en escritos considerados doctrinales, en la garantía de la imparcialidad.

Tratándose de manifestaciones de carácter doctrinal o científico, en principio, como regla, la publicación de las mismas no constituye un elemento suficiente para cuestionar la imparcialidad del juez. Sólo si concurren circunstancias adicionales —rotundidad de las declaraciones y cercanía temporal con el proceso— cabe cuestionar la imparcialidad por la publicación de dichas opiniones. Cuando el tono en que están escritas indica una especial implicación por parte del juez o un claro desprecio por posiciones opuestas, puede concluirse que falta el necesario distanciamiento y queda cuestionada la garantía de la imparcialidad.

Por tanto, aún en el caso de que las opiniones manifestadas por el recusado en este escrito hubiesen guardado relación con el objeto del recurso de inconstitucionalidad, ello no hubiera sido, a nuestro juicio, motivo suficiente para estimar la recusación frente a él interpuesta. Otra cosa hubiese sido, si del tenor del artículo pudiera concluirse que no se trata de una aportación de carácter científico o doctrinal, y que además el escrito contuviera un pronunciamiento expreso acerca de cuestiones jurídicas relevantes para esa decisión de inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad de la norma concreta.

2) Respecto de las declaraciones emitidas en «Los desayunos de Onda Cero» el día 4 de abril de 2002, la parte recusante aduce: a) que ha avanzado su posición acerca de un futuro posible recurso de amparo frente a la decisión que llegara a adoptarse sobre la ilegalización de un partido político; b) que también se ha manifestado acerca de la regulación de la legitimación para promover la ilegalización de un partido político, adelantando también su parecer al respecto; y c) que el recusado ha expresado ya su parecer en el sentido de que no existen motivos para la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada.

Todos los argumentos de la parte recusante van dirigidos a acreditar que de las manifestaciones del Magistrado Presidente se puede deducir la existencia de un juicio anticipado contrario a la imparcialidad. El Tribunal Constitucional reconduce su análisis a comprobar si concurre la causa legal de recusación prevista en el art. 219.9.º LOPJ, interés directo o indirecto en la causa. Por tanto, en teoría sólo si de las manifestaciones realizadas en el sentido de vaticinar el contenido del fallo se dedujera la existencia de ese

interés, cabría estimar afectada la imparcialidad. No obstante, el TC introduce aquí un concepto de interés tan amplio, que dentro del mismo prácticamente puede encuadrarse cualquier motivo que pueda fundar sospechas de parcialidad.

a) Manifestaciones sobre un futuro posible recurso de amparo frente a la decisión que ilegalizara un partido político.

El Tribunal Constitucional analiza estas manifestaciones a la luz de dos criterios: el tono de las mismas y la relación entre ellas y el objeto del proceso, para llegar a la conclusión de que el tono en que se expresa el recusado carece de la contundencia necesaria para deducir que su opinión está comprometida, y que, además, tales manifestaciones no tienen incidencia en el recurso de inconstitucionalidad, pues se refieren a un hipotético futuro proceso de amparo.

La conclusión a la que llega el TC sobre este punto nos parece correcta, pues de la forma y el tono de las declaraciones sobre la dificultad de resolución de un posible hipotético recurso de amparo, no puede deducirse la existencia de una posición firme y de carácter definitivo respecto de la constitucionalidad de la ley ahora objeto de revisión constitucional. En cuanto a la argumentación quizás pueda precisarse aún que, en efecto, del contenido de las manifestaciones tampoco se deduce que lo declarado pueda tener una incidencia directa en el análisis de la constitucionalidad de la ley, si bien ha de reconocerse que tales manifestaciones sí evidencian una posición general favorable a la ley y en concreto respecto del órgano competente para adoptar la decisión de la ilegalización. Pero, de ello no puede deducirse la existencia de un juicio anticipado de carácter inamovible respecto de una cuestión jurídica. Por tanto, aún en el supuesto de que esta cuestión concreta hubiera sido relevante para la decisión respecto de la inconstitucionalidad de la ley, del modo en que se realiza la declaración no puede apreciarse la existencia de un juicio anticipado que afecte a la garantía de la imparcialidad.

b) Manifestaciones acerca de la legitimación para promover la ilegalización de un partido político.

En estas declaraciones puede advertirse que el entrevistado expresa una opinión o posicionamiento jurídico acerca de una concreta cuestión regulada en el Anteproyecto de LO de Partidos Políticos, la cuestión de la legitimación. Pero en ellas, su posición consiste en admitir que, desde la perspectiva constitucional, son diversas las opciones posibles para la regulación de la legitimación. No expresa ni asume aquí una fórmula como la única válida, sino que hace una valoración jurídica en abstracto de las posibles fórmulas legales y su conformidad con el texto constitucional. Se trata ahora de valorar si esta de-



claración puede valorarse como una juicio ya formado acerca de la cuestión que se suscita en el proceso de constitucionalidad.

En primer lugar, la posición expresada en estas declaraciones se refiere únicamente a la cuestión de la legitimación y en ella no se valora la constitucionalidad del completo texto legal. Sólo si la cuestión de la legitimación fuera parte del debate en el proceso de constitucionalidad, cabría cuestionar la afectación de la imparcialidad. En coherencia, el TC desestima la posible afectación de la imparcialidad como consecuencia de estas manifestaciones «por cuanto dicha regulación no es objeto de la pretensión impugnatoria» en el proceso de constitucionalidad. La falta de relación entre el contenido de las declaraciones y el objeto del proceso en el que se plantea la recusación, es suficiente argumento para rechazar este motivo, por lo que el TC, acertadamente, no se detiene a realizar ulteriores e hipotéticos análisis.

Ese análisis que no sería apropiado en el ámbito de la decisión del TC, sin embargo, sí creo que puede ser clarificador aquí, para completar la perspectiva analítica. Pues bien, aún en el caso de que tal cuestión fuera objeto del recurso de inconstitucionalidad, el haber adelantado en los términos transcritos la posición jurídica sobre la regulación de la legitimación, no compromete automáticamente la imparcialidad del Magistrado recusado. Sólo cuando de los términos de esa declaración se pudiera deducir la existencia de un posicionamiento de carácter definitivo, cabría considerar la expresión de una opinión o valoración jurídica como un anticipo de la resolución sobre el fondo. Del tenor en que se manifiesta el recusado en esta entrevista, no cabe deducir un posicionamiento firme e inamovible sobre el tema de la legitimación, por lo que, a nuestro juicio, estas declaraciones no podrían servir de fundamento para estimar la recusación formulada.

c) Por último nos queda por aludir a las manifestaciones en las cuales el recusado se refiere a la constitucionalidad de la LO de Partidos Políticos objeto de impugnación ante el TC.

A diferencia de las manifestaciones anteriores, que versaban sobre puntos concretos no incluidos en el objeto del proceso de constitucionalidad, en éstas sí existe la vinculación con el objeto del proceso, que es premisa necesaria para que pueda llegar a cuestionarse la imparcialidad. Estas declaraciones son por ello objeto de un análisis mucho más detenido en la fundamentación jurídica del auto del TC.

Analizadas estas manifestaciones con detalle, ha puede concluirse —como concluye el TC— que de las mismas no puede objetivamente deducirse que el

Magistrado recusado tenga formado un juicio definitivo sobre el objeto del proceso.

A la luz de los diversos criterios o parámetros que hemos enunciado *supra*, consideramos que estas declaraciones no son suficientes para excluir al Magistrado por falta de imparcialidad. El tenor y el modo en el que se expresa en esta entrevista no denota una particular implicación emocional («yo no he encontrado el menos defecto o desviación importante»), no rechaza la posibilidad de otras argumentaciones («existan opiniones aisladas minoritarias, que puedan oponerse por alguna razón»), y no realiza afirmaciones categóricas o contundentes que denoten que su razonamiento se encuentra cerrado a cualquier ulterior argumentación. No sólo no aparece radicalidad en la expresión de opiniones, sino que expresamente el tono y las expresiones utilizadas denotan provisionalidad («por lo que yo conozco», «todavía»), de lo cual no cabe inferir una posición inamovible.

Creo que es preciso insistir una vez más en la idea de que, el hecho de tener opiniones sobre cuestiones jurídicas y expresar éstas públicamente, no funda sin más la sospecha de parcialidad, no son argumentos suficientes para desvirtuar la presunción de imparcialidad. Pueden calificarse de inoportunas o de inapropiadas, pero sólo cuando denotan una posición inamovible o juicio anticipado de carácter definitivo, apreciamos la concurrencia de los elementos que caracterizan una actuación parcial: la incidencia de elementos no objetivos en la formación de la convicción del juez. Pero la mera aplicación de conocimientos jurídicos a cuestiones jurídicas, y la expresión de la correspondiente conclusión, no implica parcialidad. Hay riesgo para la garantía de la imparcialidad si esa manifestación se acompaña de elementos que denotan una implicación emocional de tal índole que la opinión está cerrada a cualquier posible revisión, o si la conclusión a la que se llega no resulta lícita. El modo en que se realizan estas manifestaciones entra dentro de lo que hemos calificado como juicio anticipado sobre una cuestión jurídica de carácter provisional.

Del análisis del tono y el modo en que se expresaron las referidas opiniones, queda, a nuestro juicio, descartada la afectación de la garantía de la imparcialidad.

### *III. Manifestaciones extraprocesales y existencia de «interés directo» como motivo legal de recusación*

Resta por plantearse hasta qué punto la solución adoptada es adecuada. Para afrontar el problema del carácter taxativo de las causas legales de abstención y recusación, el TC ha introducido una interpretación amplia de los motivos legales, en concreto del art. 219.9.º LOPJ. De esa manera se confiere adecuada protección frente a situaciones sospechosas de par-

cialidad no previstas en la ley, sin necesidad de acometer una reforma legal. Mientras no se acometa una reforma legal, esta solución quizás sea la más adecuada, porque conjuga de un lado la protección de la garantía de la imparcialidad, y de otro lado el respeto del derecho al juez predeterminado por la ley, al reconocer que sólo puede excluirse del conocimiento de un caso al juez competente, cuando concurra una causa prevista en la ley.

Sin embargo, integrar la exteriorización de opiniones jurídicas que puedan calificarse como un juicio anticipado, en el concepto de interés, no resulta del todo idóneo. Sólo encaja este supuesto dentro del concepto de interés si se entiende éste en un sentido muy amplio, pero no en el sentido o acepción habitual del término. Al adelantar su opinión o juicio formado sobre una cuestión jurídica, el juez no manifiesta o expresa una voluntad de beneficiar o perjudicar a una de las partes del proceso, y tampoco demuestra un interés, en el sentido de desear que prevalezca la posición de una parte frente a la otra. Sólo equiparando «interés» a «inclinación de ánimo», puede compartirse la idea de que tener un juicio formado, en efecto, supone tener un «interés en la causa» a favor de una de las partes.

Por otro lado, es preciso destacar que esta solución, tiene una importante consecuencia que quizás no

se haya advertido a primera vista y es que, de manera silenciosa, incorpora una cláusula de cierre a los motivos de abstención/recusación. Una vez admitido que la causa de abstención/recusación del art. 219.9.º LOPJ puede interpretarse en ese sentido amplio, nos encontramos con que cualquier situación que afecte a la imparcialidad y que no está contemplada explícitamente en la ley, encajaría dentro de este precepto. Por tanto, toda situación que implique una «inclinación de ánimo» encontraría protección en el art. 219.9.º LEC. De mantenerse esta línea abierta por el TC, la consecuencia sería que *de facto*, y sin necesidad de reforma legal, entre las causas legales de abstención y recusación, figuraría una cláusula suficientemente abierta para operar como cláusula de cierre: «la inclinación del ánimo hacia el objeto o la persona». Entre esa concepción amplia del «interés directo o indirecto» y una causa abierta al estilo de «cualquier otro motivo que funde la sospecha de parcialidad» no creo que puedan advertirse grandes diferencias.

#### NOTAS

- (1) Al momento de escribir este comentario se encuentra pendiente de resolución una segunda recusación interpuesta también frente al Presidente del Tribunal Constitucional, por otras declaraciones realizadas en relación con la ilegalización de un concreto partido político, y que por obvias razones no podemos analizar aquí.

## II. Civil

§ 583. *Doña Milagros S. S. c. Camino de Alba, S. L.*  
AP Salamanca  
A 26 junio 2002

§ 583. SUPUESTA PREFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO SOBRE EL MONITORIO

*Doña Milagros S. S. c. Camino de Alba, S.L.*  
Audiencia Provincial de Salamanca.  
Auto de 26 de junio de 2002.  
Civil: recurso de Apelación (proceso monitorio: pagaré).  
Magistrado ponente: Marino Borrego.  
Abogados: no constan.

#### *Hechos y cuestiones jurídicas*

*Doña Milagros S. presentó ante el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de Salamanca, solicitud inicial de proceso monitorio para la ejecución de un pagaré frente a Camino de Alba, S.L. Este juzgado dictó auto por el que declaraba la no admisión a trámite de dicha solicitud por*